

LA OPOSICIÓN POLÍTICA EN BRASIL *

Rodolfo J. PINTO DA LUZ

SUMARIO: I. Introducción; II. La oposición en el Imperio; III. La oposición en la República; IV. Periodo posterior a 1930; V. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

Al tratar de la oposición política en Brasil es preciso destacar dos vertientes: la primera se refiere a la oposición formal, constituida por los partidos políticos; la segunda se dice informal, esto es, la que no está representada por partidos políticos, como son las élites agraria o militar, los sindicatos, la Iglesia y las diversas fuerzas sociales que configuran, o no, asociaciones y movimientos formalmente organizados.

El panorama político de las sociedades en desarrollo ha dado origen a una enorme complejidad de grupos diferentes en lucha por el predominio de sus intereses en las decisiones de gobierno. La dinámica de dichos grupos, o su proceso de formación, sus propósitos básicos y sus formas de comportamiento han sido preocupación constante de los estudiosos de la ciencia política, que se han dedicado siempre, de modo especial, al estudio de los conflictos y los intereses de grupo.

Es en este contexto, por tanto, en que en ocasiones se contraponen de un lado el Estado y del otro la sociedad civil, organizada o no, que se traba la lucha por el poder y por las decisiones que de él emanan y que se origina la oposición política.

II. LA OPOSICIÓN EN EL IMPERIO

En Brasil, la oposición formal se da en el nivel de los partidos políticos. La oposición a nivel informal se produce dentro de los diversos movimientos insurreccionales posteriores a la renuncia del Emperador

* Traducción del portugués de Héctor Fix Fierro.

Pedro I, esto es, de 1831 hasta 1849, año en el que el poder central dominó la última de las revueltas.

Después de la abdicación de Pedro I, ocurrieron en Brasil las siguientes revoluciones: Ceará (1831-1835); Pará, Maranhão, Mato Grosso y Minas Gerais (1832-1835); Pará (1836); Bahia (Sabinada 1837-1838); Maranhão (Balaiada 1838-1841); São Paulo y Minas Gerais (1842); Rio Grande do Sul (Farrapos, 1835-1845) y Pernambuco (Praieira, 1848-1849). Estas revueltas fueron provocadas generalmente por movimientos de oposición al gobierno.

En 1823, al convocarse la Asamblea Constituyente para elaborar la primera Constitución, se observa el surgimiento de las facciones políticas: los monarquistas, los moderados y los radicales. Los primeros crearon la Sociedad Conservadora, que pasó a llamarse Sociedad Militar después de 1832. Los radicales formaron la Sociedad Federal y, finalmente, los moderados se organizaron en la poderosa Sociedad Defensora de la Libertad y la Independencia. Estas organizaciones, que fueron en realidad los primeros partidos brasileños, representaban principios políticamente inconciliables: monarquía y república. Sus actividades políticas, marcadas por acciones radicales y subversivas, propagaron la guerra civil en el país a partir de 1832.

A la extinción de estas facciones surgieron los partidos Liberal y Conservador, los cuales definirían la lucha política desde 1836 hasta el final del régimen monárquico en 1889.

Estos partidos no presentaban diferencias ideológicas marcadas, ya que ambos aceptaban la filosofía liberal clásica de escasa intervención del Estado en el ámbito económico, así como otras características propias del liberalismo del siglo XIX.

La oposición entre liberales y conservadores se caracterizaba de la siguiente manera:

a) los liberales defendían el derecho de resistencia armada contra las arbitrariedades del gobierno o contra las violaciones a la Constitución, a lo que los conservadores se oponían, proclamando que la existencia de la libertad de pensamiento y que la prensa, los tribunales y las urnas eran instrumentos suficientes para la reparación de estos agravios;

b) los liberales propugnaban la descentralización del poder, la actuación mínima de la policía y la elección de los funcionarios del Estado en todos los niveles, mientras que los conservadores consideraban que la centralización era necesaria para la integración del Imperio y se oponían a la elección de los magistrados, por considerarla perjudicial a la independencia, a la inamovilidad y a la dignidad de su misión protectora de los derechos del ciudadano.

La oposición parlamentaria comienza a existir solamente en 1849, cuando el gobierno central consigue dominar las revueltas. Entonces, las transferencias del poder se dieron pacíficamente, con la alternancia de los partidos en el poder. El que no se encontraba en el poder aceptaba la existencia de la oposición.

Este sistema subsistió hasta 1853, cuando se inauguró el llamado periodo de conciliación —en la realidad una etapa de predominancia del Partido Conservador. La “Conciliación” fue un consenso entre los partidos para evitar la práctica de la oposición y para favorecer una política de realizaciones conjuntas.

El dominio conservador llevó a la creación de la Liga Progresista, en el poder de 1862 a 1867, periodo de confrontación entre ésta, los históricos y los miembros del Partido Conservador. En 1868, los liberales descontentos con Pedro II fundaron lo que en 1870 dio origen al Manifiesto Republicano y al Partido Republicano, el punto culminante de este movimiento liberal-republicano. Los 19 años siguientes, 1870-1889, se señalarán por la alternancia normal en el poder entre liberales y conservadores.

El periodo se caracteriza por la dependencia de los partidos políticos imperiales respecto de la élite agraria. El acceso a la vida política y principalmente al liderazgo partidario estaban vedados, en la práctica, a los miembros de clases distintas de la élite rural. Hasta la reforma electoral de 1881 (Ley Saraiva), no hubo elecciones directas. Facilitaban el dominio de los grupos aristocráticos la reducción del círculo de los electores a los calificados patrimonialmente y el hecho de tratarse de elecciones indirectas. Las oligarquías controlaban las elecciones, coaccionando a los electores, falsificando los resultados. No es posible hablar de oposición política en este contexto.

El aislamiento oficial de los feudos fue desapareciendo durante la colonización, y la consecuencia inmediata del aumento de ellos fue la aparición de los clanes familiares. El relevo de los partidos, la situación entre oposición y gobierno establecido, a nivel nacional, significaba la ascensión o caída de un clan o de otro.

El dominio de los clanes fue amenazado por el desarrollo de factores como la aparición de nuevas actividades económicas en las urbes y la inmigración, los cuales vinieron a crear una clase media que aceptaba las ideas liberales, lo que determinó la reforma electoral.

Durante casi todo el periodo del Imperio, la ausencia de grupos opositores dio a los propietarios rurales el control absoluto del sistema político. En la medida en que la élite militar y la clase media se iban formando, la clase agraria concentraba su dominio en los altos escalones del gobierno

y de los partidos políticos. De esta forma, la política partidista se desenvolvía entre los clanes y el conflicto no era más que una división dentro de la élite. La oposición política partidista, por tanto, se daba a nivel interno del grupo rural dominante, excluidas otras parcelas de opinión o grupos.

La infiltración del positivismo y el resentimiento de los oficiales por la falta de atención para con el ejército desarrolló un sentimiento antimonarquista. De la misma forma, la participación de los oficiales en el movimiento abolicionista aumentó la oposición al gobierno. Los militares incrementaron su intervención en la política a partir del reconocimiento de sus esfuerzos en la Guerra del Paraguay, siendo la autoridad del gobierno reiteradamente impugnada. La proclamación de la República fue un movimiento militar apoyado por la clase media, en oposición al régimen vigente.

III. LA OPOSICIÓN EN LA REPÚBLICA

El advenimiento de la República fue una consecuencia directa de la oposición militar al Imperio. El gobierno autocrático del mariscal Floriano Peixoto impidió la formación de una oposición; sin embargo, para dar sustentación a su política se creó un partido político como apoyo legislativo y garantía de institucionalización de la República. Surgió entonces el Partido Republicano Federal, un gremio heterogéneo formado por personas de todos los orígenes (republicanos, monarquistas, liberales, federalistas, centralistas, etcétera), inestable y dependiente del dictador.

Los cinco primeros años representaron el ascenso de la clase media al poder a través de los militares, los cuales habían empezado a formar un poder independiente a partir de la Guerra del Paraguay.

En este sentido, el gobierno provisional (después de la proclamación de la República) y la dictadura (gobierno de Floriano) fueron gobiernos antielitistas, porque los militares fueron la mayor oposición a la élite rural anteriormente en el poder.

En este periodo fue inaugurada la "política de los gobernadores", la alianza del poder central con los jefes políticos locales, los gobernadores. Para los líderes republicanos, los partidos eran responsables de las calamidades acontecidas durante los gobiernos de la monarquía, por lo que no eran necesarios. La más grave consecuencia de este modo de pensar fue la consolidación de las oligarquías de los estados, que gobernaron sin temer la amenaza de las facciones políticas internas, menos aún de una oposición.

Los congresistas y los gobernadores de los estados eran electos directamente por el pueblo, pero estaban controlados por los clanes electorales. Los jefes de las oligarquías locales o clanes electorales estaban representados, regionalmente, por los gobernadores de los estados. Éstos, a su vez, recibían su poder a través del jefe político republicano, cuya fuerza derivaba de su posición como hacendado y del prestigio de que gozaba. Rara vez era impugnada su autoridad y en la práctica no había oportunidad económica que no proviniera de él, y en consecuencia, no había oportunidad de oposición.

La estructura política asentada en la política de los gobernadores, significaba el retorno de los propietarios de tierras al poder. La clase media, que conquistara el liderazgo político a través de las fuerzas militares, no fue suficientemente fuerte para resistir al poder de las oligarquías locales, organizadas en clanes electorales. En esta coyuntura, los partidos se volvieron innecesarios e inviables. Innecesarios a la élite agraria, que tenía a los gobernadores como sus representantes, e inviables para otros grupos compelidos a la pasividad por la oligarquía dominante.

La oposición reaccionó entonces a través de asambleas y publicaciones, cansada de esperar una escisión en la élite rural, que no vino. El gobierno respondió con el estado de sitio, situación en que las garantías constitucionales quedaban en suspenso.

Dicha reacción opositora provino de la Campaña Civilista, de la Reacción Republicana y de la Alianza Liberal, rebeldes contra la oligarquía feudal, reivindicadores de elecciones libres y nuevas prácticas político-administrativas.

La campaña civilista, una respuesta al nombramiento del presidente de la República por el poder central en un proceso viciado, obtuvo resultados electorales significativos en las grandes ciudades y lugares con mayor libertad política, dando cuenta a la opinión pública de las máquinas electorales. Derrotado el opositor Rui Barbosa en su peregrinación nacional, se produjeron revueltas armadas en varios estados. La Campaña Civilista, opuesta al militarismo, se repitió en 1914 con el nombre de Partido Republicano Liberal, todavía como oposición al Partido Republicano Conservador, creado para dar apoyo al presidente mariscal Hermes da Fonseca, electo en 1910.

Otro movimiento de oposición al *status quo* entonces vigente fue la Reacción Republicana, también en respuesta al candidato oficial. Recordaba en cierto modo a la Campaña Civilista de Rui Barbosa, en su peregrinación por el interior del país.

La oposición se manifestó no sólo a nivel nacional, sino que también apoyó fuertemente a los candidatos antigobiernistas en las elecciones es-

tatales. Otras manifestaciones opositoras ocurrieron en la época, como una guerra en Rio Grande do Sul —donde la reacción era más fuerte— y la rebelión del Fuerte de Copacabana en Rio de Janeiro. La presidencia del candidato victorioso fue marcada por disturbios, ataques y revueltas contra su gobierno.

Es importante destacar que por primera vez surgió un movimiento en la política brasileña —Reacción Republicana— cuyo objetivo era combatir a la oligarquía dominante.

Siguió un periodo en el que no existieron partidos del lado de la oposición, por la desorganización y el debilitamiento causados por las dos derrotas subsecuentes. Desde el punto de vista de los propietarios rurales, no había interés o necesidad de crear un partido político en la medida de que no existiese un grupo de oposición organizada, ya que los mecanismos de control existentes habían sido eficaces hasta ese momento.

Los ideales de moralización política de la joven oficialidad despertaron simpatías en el sector liberal de la sociedad. Este factor, unido a la desintegración de la solidaridad de las élites rurales, que se habían organizado en dos grupos —Alianza Liberal y Concentración Republicana, esta última oficial— llevaron al derrocamiento del régimen, a través del movimiento denominado Revolución de 1930, que culminó con el ascenso de Getulio Vargas, apoyado por los jóvenes oficiales.

El tipo de control ejercido por la élite agraria, a partir de 1889 hasta 1930, hizo posible la existencia eventual de los partidos políticos, que aunque derrotados, reaparecían una y otra vez.

IV. PERIODO POSTERIOR A 1930

La interrupción del ciclo en el cual el indicado por el Presidente era siempre el que resultaba electo y ascendía al poder, terminó con el periodo que se llamó de la República Vieja, que va de 1889, fecha de la Proclamación de la República, hasta 1930, año del ascenso del líder civil armado de oposición, Getulio Vargas, que habría de gobernar ininterrumpidamente el país hasta el año de 1945.

Al igual que en 1889, cuando la República sucedió al Imperio, el control fue asumido en el momento crítico por los militares superiores y transferido entonces a los nuevos cuadros de políticos civiles. Así se reforzó, de ahí en adelante, la posición de los militares en su función de árbitros finales de la política interna.

Aunque el país seguía siendo abrumadoramente agrícola (70% de los trabajadores estaban en la agricultura en 1920), dos factores distinguían los acontecimientos del momento de las meras luchas por el poder: el pri-

mero, la Revolución de 1930 puso fin a la estructura republicana creada en la década de 1890, que se hundió bajo el peso de sus disensiones internas y por la presión de una crisis económica mundial, y el segundo, que había una conciencia, incluso antes de 1930, de la necesidad de una revisión del sistema político.

El grado de los cambios que pretendían los revolucionarios iba de poco más que modificaciones constitucionales (constitucionalistas) hasta ambiciosos planes de reformas de orden económico y social (nacionalistas). Ambos grupos tenían en común el deseo de eliminar lo antiguo. El esfuerzo tuvo por resultado siete años de improvisación, incluyendo una revuelta regionalista en São Paulo, un movimiento fascista y una tentativa de golpe comunista. Exhausto el país, en 1937 terminó su experimentación política e inició ocho años de régimen autoritario, también bajo el mando de Getulio Vargas, el llamado Estado Nuevo.

De un lado de la revolución del '30 estaban los constitucionalistas, que deseaban implantar los ideales liberales clásicos (elecciones libres, gobierno constitucional y libertades políticas plenas). Fuertes en São Paulo, encontraban apoyo en la creciente clase media, y estaban representados por el Partido Democrático, de oposición al candidato del presidente anterior depuesto.

Del otro lado se encontraban los nacionalistas semiautoritarios, cuyas preocupaciones eran la regeneración nacional y la modernización. Sus principales miembros eran los Tenientes de las revueltas fracasadas de 1922 y 1924. Optaban por políticas no democráticas, con el fin de lograr reformas sociales y económicas inmediatas.

La escasa industrialización del país no había producido ningún movimiento de masas o incluso de liderazgo unificado de izquierda. El modesto movimiento sindical estaba dividido entre anarquistas, trotskistas, radicales y comunistas. El Bloque Obrero y Campesino no consiguió ejercer ninguna influencia en la revolución del '30 y el Partido Comunista entendía el movimiento como una lucha entre facciones de la burguesía nacional.

Los partidarios de un cambio no revolucionario, los constitucionalistas, estaban representados por los oficiales superiores, por los plantadores de café y por los miembros disidentes de la élite política establecida. Habían apoyado la Revolución, no para obtener reformas sociales y económicas profundas, sino porque habían sido postergados por el presidente depuesto en sus ambiciones políticas.

La creciente concentración de poder en manos del gobierno provisional, concentración ausente bajo el federalismo de la República Vieja, fue

el foco de lucha por el poder entre los elementos divergentes de la coalición revolucionaria.

En oposición a un mandato indefinido de Vargas, propuesto por los Tenientes, los constitucionalistas presionaban en favor de garantías constitucionales, con el Partido Democrático de São Paulo al frente. El rompimiento de éste con el gobierno provisional y la subsecuente alianza con los oficiales superiores descontentos, llevó a la Revolución Constitucionalista de 1932 en São Paulo, el primer gran movimiento de oposición al nuevo régimen.

La indiferencia de las clases trabajadoras al movimiento opositor y el carácter separatista que éste tomó, permitió a Vargas aislar la oposición, encabezada por miembros remanentes de la oligarquía rural, en los estados de Rio Grande do Sul y Minas Gerais.

El temor de los Tenientes al retorno de las oligarquías rurales los llevó a una alianza con los sindicatos y a la imposición de la participación de éstos en la asamblea constituyente que se había convocado entonces. La Constitución que salió de ella demostró ser un producto híbrido, que combinaba los ideales del liberalismo y los del reformismo económico.

Si el acuerdo precario incorporado en la Nueva Constitución hubiese sido el fruto de un equilibrio entre fuerzas económicas opuestas, podría haber gozado de mayores perspectivas de longevidad. Sin embargo, los grupos políticos más íntimamente identificados con las posiciones del constitucionalismo liberal y del reformismo socioeconómico fueron superados, en 1934, por un nuevo género de activismo político. La política en Brasil, como en Europa al comienzo de la década de 1930, marchaba hacia la radicalización.

En el Brasil se crearon la Alianza Libertadora Nacional, de izquierda, organizada por el ala legalista del Partido Comunista, y la Acción Integralista Brasileña, de derecha. La ALN pugnaba por la cancelación de la deuda externa, la nacionalización de las empresas y la liquidación de los latifundios, y era encabezada por el líder histórico Luís Carlos Prestes. El Integralismo, encabezado por Plinio Salgado, era la versión autóctona del nazifascismo.

Ante la creciente radicalización, el Congreso, dominado por los miembros de la clase media y de la agricultura, otorgó poderes excepcionales al presidente, que frente al fracaso de la revuelta comunista de 1935, hizo viable el golpe de 1937 que instituyó el Estado Nuevo.

Los oficiales superiores del ejército justificaron la revuelta totalitaria basados en que la libre competencia política fracasaría, haciéndose peligrosa para la unidad y la seguridad nacionales. El desenlace autoritario del proceso político fue el resultado final de una lucha iniciada en 1930

por los no revolucionarios constitucionalistas y por los revolucionarios del tenentismo no democrático y autoritario.

La aniquilación de los dos movimientos políticos nacionales —de la Alianza Libertadora Nacional en 1937 y de la Acción Integralista Brasileña en 1938— liquidó la oposición existente. De 1938 hasta fines de 1944, el Estado Nuevo se sustentó en el apoyo de las Fuerzas Armadas, en la policía de Vargas y en la desorganización, desmoralización y debilitamiento de la oposición.

Este periodo representa un hiato en el desarrollo de la política partidaria. Los comunistas y los radicales fueron duramente reprimidos. Los constitucionalistas enmudecieron y los integralistas desaparecieron.

A fines de 1944 los brasileños se habían dado cuenta de la anomalía que significaba luchar por la democracia en el exterior mientras que persistía una dictadura dentro de su propio país. Antes de 1945 hubo apenas una declaración importante de oposición. En octubre de 1943, un grupo de intelectuales y políticos de Minas Gerais emitió un cauteloso manifiesto pidiendo la vuelta de la democracia al Brasil y argumentando que la libertad de opinión y el gobierno constitucional eran aspiraciones naturales de los brasileños.

En 1945, el primer congreso brasileño de escritores pidió la completa libertad de expresión y exigió un nuevo gobierno electo por sufragio universal, directo y secreto.

El gobierno fijó entonces fecha para las nuevas elecciones. Amnistió a los presos políticos y pasó a apoyar a un candidato militar, todo con el objetivo de revertir la creciente insatisfacción popular e impedir en lo posible el fin del régimen. En ese momento explotó la campaña “Quere-mista”, que quería decir “Constituyente con Getulio”, esto es, elaborar primero una nueva Constitución y hacer después las elecciones.

La oposición, ahora la UDN —Unión Democrática Nacional, constituida por los liberales constitucionalistas— reaccionó ante esta propuesta con el temor de que Vargas señalara interventores que controlaran la selección de los futuros constituyentes. Paradójicamente, los comunistas apoyaban al dictador.

Las sucesivas modificaciones electorales propuestas por el gobierno levantaron sospechas en los militares y determinaron la deposición del dictador. La caída de éste no resultó de un acto organizado de oposición, sino, una vez más, como en 1930 y en 1937, de una intervención militar.

La separación del poder de Vargas significó la necesidad de una nueva estructura legal: una constitución y nuevos y fuertes partidos políticos. Del derrocamiento derivó también un fortalecimiento de la clase media urbana, alfabetizada, y por tanto, conforme con la Constitución de 1946,

decisiva en la contienda electoral. Por lo demás, los grupos de poder tradicionales, especialmente los propietarios de las tierras, conservaron su fuerza en las áreas no afectadas por cambios económicos significativos.

La delimitación entre oposición y *establishment* había configurado con base en éste la red de poder de Vargas, que incluía a los políticos y burócratas del régimen derrocado; los propietarios de tierras e industrias que habían prosperado bajo el dictador (hacendados del café y latifundistas, a los cuales les agradaba el silencio sobre la reforma agraria); los banqueros y los hombres de negocios, que habían tenido que aprender a lucrar con el control central del crédito y los reglamentos comerciales y, por último, los trabajadores urbanos beneficiarios de la previsión social y de los sindicatos controlados por el Estado.

Políticos, burócratas, propietarios de tierras, banqueros y hombres de negocios se unieron en el Partido Social Democrático (PSD) mientras que los trabajadores optaron por el Partido Laborista Brasileño (PTB). Este último representaba el esfuerzo de Vargas para impedir el crecimiento de los comunistas.

La oposición tenía ya como grupo hegemónico a los constitucionalistas liberales, organizados en la UDN (Unión Democrática Nacional) identificada con el cuerpo de oficiales, porque ambos actuaban o provenían de la clase media. Entre los que no estaban en el poder en el régimen antiguo, se encontraban los comunistas, influyentes en los grandes centros urbanos.

En este cuadro político fue electo Eurico Gaspar Dutra, excomandante del Ejército en el periodo de Vargas. La actuación contundente contra la propuesta liberal adoptada en el inicio del gobierno Dutra, llevó a los comunistas a la ilegalidad en 1947, en polémica decisión del Supremo Tribunal Federal, con base en la Constitución Federal. El PC fue declarado antidemocrático e impedido de participar en la vida política. La decisión tuvo el apoyo del ejército.

Mediante la intervención en los sindicatos, fueron expulsados de la Confederación de Trabajadores Brasileños, por antidemocráticos, los líderes laboristas opositoristas. La voz más importante de la oposición pasó a ser el exdictador, que aprovechando el vacío en la izquierda, articuló al PTB en ese espacio político, buscando el retorno al poder.

Vargas procuró eliminar su imagen anterior y crear la de un político populista, capaz de atraer la atención de las grandes masas urbanas. Trabajó los apoyos a su candidatura no sólo entre los políticos, sino también entre los militares, sabedor de la importancia de los que lo habían llevado primero al poder y más tarde, lo depusieron.

La oposición a él estaba dividida. Incapaces de encontrar un candidato de coalición, UDN y PSD lanzaron candidatos propios. Getulio, con su PTB, se alió al populismo regional de Ademar de Barros y su PSP (Partido Social Progresista), fuerte en São Paulo. Efectuó también alianzas con el PSD, partido de las oligarquías rurales y de políticos urbanos tradicionales, donde le fue posible. Venció en la elección con casi el 50% de los votos y hubo de enfrentar una tentativa de impugnación al resultado antes de asumir el poder, que fue garantizado por los militares.

Al no conseguir la cooptación de sus adversarios históricos, ahora en la UDN, frente a la crisis económica con tasas crecientes de inflación y desgastado entre los militares por sucesivas acusaciones de corrupción, Vargas puso fin a su vida en agosto de 1954 para evitar un nuevo derrocamiento.

Ascendió entonces al poder el vicepresidente João Café Filho, de la UDN, que fue forzado a pedir licencia, siendo sustituido por el presidente de la Cámara de Diputados, depuesto 24 horas después de asumir el cargo.

Getulio había subestimado a la clase media, la cual desempeñara un papel importante en su elección de 1950. El hecho político principal en relación con ella era la ausencia de cualquier partido que pudiese representar sus intereses. Su opinión vino a ser expresada por más de una intervención militar, portavoz de su insatisfacción.

El periodo Kubitschek se caracterizó por una extraordinaria expansión industrial (80% en 5 años). El modelo que se adoptó fue el nacionalismo desarrollista. Previa aceptación del capital extranjero mediante una cuidadosa reglamentación; incentivos para las prioridades de inversión; intervención de las empresas estatales y de economía mixta en los sectores estrangulados y estatización de los recursos naturales. Se dieron incentivos a la creación de *joint ventures* y el gobierno emprendió un programa de inversiones públicas. El éxito de la política económica fue el resultado directo de la capacidad para mantener la estabilidad política. Juscelino aprovechó también la construcción de una nueva capital para desviar la atención de la opinión pública sobre los graves problemas como los de la enseñanza y la reforma agraria. Juscelino Kubitschek fue incluso el presidente que más universidades públicas estableció.

El ambicioso programa dependía, con todo, de la aportación de capitales de fuentes públicas y del exterior. Pero las ganancias por las exportaciones no llegaron y tampoco el apoyo financiero norteamericano.

Apremiado por la inflación, el gobierno aplazó un programa de ajuste, dando prioridad a la contienda electoral de 1958. Juscelino no quería perjudicar tampoco su Plan de Metas, apoyado en inversiones públicas.

Ante los reclamos de crédito por los empresarios y las presiones de los radicales sobre el gobierno, Kubitschek optó por la ruptura con el FMI.

El crecimiento de las grandes ciudades y el avance del populismo asustaron a los grupos que tenían algo que perder con el desequilibrio del poder. Proprietarios rurales, clase media, militares —adictos al populismo— empezaron a inquietarse.

La elección presidencial de 1960 acentuó el abismo entre el gobierno nacional y la mayoría de los parlamentarios del Congreso, dueños éstos de la máquina electoral, con fuerza para impedir medidas favorables a las regiones desarrolladas. La estructura política, combinando un presidente electo popularmente con el cuerpo legislativo cargado de gran representación regional, fue incapaz de responder con velocidad a las necesarias transformaciones socioeconómicas.

En este contexto electoral se eligió a Janio da Silva Quadros, un oscuro exprofesor que hiciera una meteórica carrera a partir de 1954 como concejal, prefecto y luego gobernador de São Paulo, apoyado por la clase media. Derrotó a la oligarquía rural y llevó como vicepresidente a João Goulart, del PTB, un adversario histórico. Al no lograr apoyo para llevar adelante sus propuestas de reforma, Janio renunció después de seis meses de gobierno, como forma de hacer posible el retorno de un gobierno autoritario.

Una transacción política permitió la introducción del parlamentarismo, en negociación con los militares, que no deseaban la toma de posesión de João Goulart. Éste, apoyado en la Campaña de la Legalidad de su cuñado Leonel Brizola, entonces gobernador de Río Grande do Sul, asumió el poder en septiembre de 1960 y 14 meses después, a través de un plebiscito, restauró el presidencialismo.

El nuevo presidente, con sus Reformas de Base, contrarió los intereses de la oligarquía rural, a la que el PSD daba apoyo político en el congreso. Tampoco contaba con la simpatía de la UDN, tradicional adversaria del getulismo, del cual provenía el presidente. El acercamiento al Partido Comunista y su incapacidad para contener el avance sindicalista, agravada con la insubordinación de militares subalternos, llevaron a los militares a intervenir nuevamente en 1965, esta vez por más de 20 años.

Según Fernando Henrique Cardoso, hoy líder del Partido de la Social Democracia Brasileña, fue sorprendente la falta de resistencia del nacional-populismo y la rapidez de su disgregación.

A la ruptura antecedió la movilización de la clase media, de la oligarquía rural y del empresariado activo. Se dio en el momento en que se aceleraban las llamadas reformas de base: reforma agraria, aplicación

de la sindicalización, redistribución, reglamentación del capital extranjero y una mayor estatización.

Ganaron entonces importancia los agentes del capitalismo internacional, brasileños o no: sectores de las fuerzas armadas y de la tecnocracia, que asumían funciones represivas en el plano político y modernizadoras en el plano económico.

En cambio, perdieron prestigio los sectores agrarios tradicionales, los de la burocracia, los académicos, los políticos y los sindicatos.

La aceptación de la hegemonía militar por la burguesía nacional ocasionó la imposibilidad de que los civiles retomaran el poder. Los políticos dejaron de ser el canal de intermediación con la sociedad. En el primer momento que se anuncia la oposición, con motivo de la derrota de los candidatos revolucionarios en estados importantes como Guanabara y Minas, en 1965 se declaran extintos los partidos a través del Acto Institucional número 2.

Pero hacia 1968 crece la oposición: marcha de los cien mil, primeros actos guerrilleros, oposición franca del Movimiento Democrático Brasileño, el partido de la oposición, y creación del Frente Amplio, un movimiento conducido por líderes cuyos derechos políticos estaban suspendidos.

La oposición interna constituida por la joven oficialidad, de los sectores nacionalistas del ejército y de los ultrarrevolucionarios, exige la expedición del AI-5, instrumento del arbitrio de una larga dictadura militar. La enfermedad del presidente Costa e Silva impidió la vuelta a la constitucionalidad y los militares, para impedir la disensión interna, eligieron su sucesor a través de un colegio de oficiales superiores. Con Médici se instaló una larga noche de arbitrariedad y terror, cuyos principales actores fueron los DOI-CODI, órganos del aparato represor militar, que diezmaron cualquier oposición entonces existente.

El régimen instaurado a partir de 1964 derivó fundamentalmente del pensamiento elaborado por la Escuela Superior de Guerra, denominado de Seguridad y Desarrollo. Fundamentado en el pensamiento de Oliveira Viana y de Alberto Torres, según el cual la élite es la que estaba preparada para conducir el país dentro de un modelo centralizador, la doctrina incorporó el nacionalismo del tenentismo y se desarrolló como propuesta elitista y antipolítica.

La Escuela Superior de Guerra tuvo sus comienzos a partir de 1949 para la formulación de una propuesta tendente al desarrollo nacional, con los antiguos Tenientes Juarez Távora y Golberri de Couto e Silva, más tarde próceres de 1964. Sus integrantes se hicieron presentes en el episodio que se llamó "novembrada" —la tentativa de impedir la toma de

posesión de Juscelino Kubitschek en 1955— como también fue el mismo núcleo que intentó impedir la toma de posesión de João Goulart en 1961. En ambos episodios se encontraba contra la inmensa mayoría del pueblo brasileño y las operaciones no tuvieron éxito. En 1964, sin embargo, no estaban a contramano de la historia y, cansados de ver a los civiles llamar a sus puertas, tomaron el poder.

El modelo adoptado realizó desde luego una gran reforma tributaria, centralizando los recursos provenientes de los impuestos en manos del gobierno central, necesario para financiar los procesos de modernización y mantener el control político de las oligarquías del PSD y de los liberales de la UDN que, unidos, se integraron en lo que se llamó Arena, Alianza Renovadora Nacional, el partido de apoyo legislativo de la revolución.

De la misma forma, la Universidad como centro de oposición fue amordazada por la Reforma de 1968, que consistió en la centralización burocrática, la formación orientada al mercado de trabajo y la eliminación total de la autonomía mediante el control del cuadro dirigente.

La oposición formal cristalizó en el MDB (Movimiento Democrático Brasileño) una oposición consentida, formada a partir de los restos de la clase política del antiguo régimen.

La oposición de hecho se encontraba en la calle o en la clandestinidad, a través de la sociedad civil y estaba integrada por el movimiento estudiantil, por algunos sectores de la Iglesia, organizaciones de clase como la OAB (Orden de los Abogados del Brasil) y la ABI (Asociación Brasileña de Prensa).

Superado el periodo inicial de crecimiento económico, y agotada la abundancia de capital externo a tasas bajas de interés, surgieron los problemas de pago de la deuda, de la balanza de pagos y de la inflación, hasta entonces prácticamente inexistentes para la norma brasileña.

Brasil no supo enfrentar los dos choques del petróleo. Continuó invirtiendo en grandes obras de difícil rentabilidad y no adecuó su modelo de industrialización a los nuevos tiempos. El resultado fue que los hasta entonces beneficiarios, las burguesías internacional y nacional, el grupo militar, las clases medias en ascenso y algunos sectores de los estratos populares, pasaron a sentir los efectos de este nuevo cuadro económico.

Las altas tasas de interés y el déficit público crónico aceleraron el crecimiento inflacionario, mientras que el ejercicio de largos años en el poder llevaba al régimen a un desgaste por la aparición de la corrupción. Se abandonó la idea de que el crecimiento sólo era posible con un régimen autoritario y los propios militares, a partir de la elaboración de recetas

de la ESG, empezaron a formular alternativas para una transición política para la sociedad civil.

Primero vino la distensión con Ernesto Geisel, expresidente de la poderosa empresa Petrobras, que tuvo que enfrentar el aparato de represión política, los DOI-CODI, un Estado dentro del Estado. Sobrevivió a una tentativa de golpe destituyendo a su ministro de Defensa y posteriormente al comandante de la principal unidad militar del país, ambos representantes de los "bolsillos revolucionarios", que se caracterizaban por su anticomunismo visceral.

La etapa de transición permitió, por primera vez, una campaña política abierta a través de los medios de comunicación. El pueblo, harto de la represión y apremiado ya por la inflación, votó masivamente por la oposición —el MDB— eligiendo 16 de los 24 cargos de senadores en disputa en 1974.

Ante el avance creciente de la oposición, ahora ya mediante la actuación del nuevo sindicalismo brasileño, Geisel reaccionó en 1977 disolviendo el Congreso y determinando una profunda reforma de la Constitución mediante un acto autoritario.

Con habilidad, el gobierno tomaba en cuenta las crecientes presiones de la comunidad de inteligencia y de los sectores llamados de "línea dura". Era necesario preservar el proceso de "apertura" lenta, gradual y segura.

Revocado el Acto Institucional número 5 —el instrumento de la arbitrariedad— el gobierno escogió como sucesor a João Figueiredo, un militar de brillante carrera. Éste concluyó la transición del régimen bajo el mando militar firmando una amnistía, un instrumento político por el cual los castigados por la revolución eran reintegrados a la vida pública, a cambio de que se olvidara la arbitrariedad.

Figueiredo, un militar de la comunidad de inteligencia, tuvo que enfrentar la hostilidad del aparato policial del Estado, que mediante actos de terrorismo de sus propios miembros, trató de hacer inviable el proceso de democratización del país.

La agravación de la situación económica, la pérdida de los fieles aliados del cuartel, la decepción respecto de los políticos, con los cuales tenía una relación difícil y sus problemas de salud, hicieron que el presidente estuviera casi ausente en los últimos dos años de los seis de su mandato. El país fue gobernado por la burocracia de segundo rango.

Las disensiones internas del régimen frente a la disputa para la sucesión del presidente, y la incapacidad de Figueiredo en la coordinación del proceso, provocaron que una gran parte del Partido Democrático Social (PDS), sucesor de Arena, formara un nuevo partido, el PFL (Partido del Frente Liberal).

En él se agruparon en su gran mayoría los integrantes de la extinta UDN (Unión Democrática Nacional) a la cual ya nos referimos. Herederos de los constitucionalistas liberales, contaban incluso entre sus filas al vicepresidente de Figueiredo, quien se encontraba ya en conflicto con el presidente, y fuera después relegado en la disputa por la sucesión por el exgobernador de São Paulo, Paulo Salim Maluf.

Se operó entonces la gran transacción política, buscando la transición institucional hacia un régimen democrático. Ante el rechazo al candidato oficial por amplios sectores, inclusive militares, éstos sectores se aliaron al PMDB —sucesor del MDB— y con el apoyo de los nuevos partidos políticos de izquierda —con excepción del Partido de los Trabajadores (PT)— eligieron a Tancredo Neves, hasta entonces gobernador de Minas Gerais.

Agotado políticamente el régimen por la desintegración de sus élites (civiles y militares) y económicamente por la caída de la economía (alta inflación, déficit público creciente, estancamiento industrial), se produjo una transición pacífica. Las fuerzas armadas retornaron a su papel profesional tradicional, mientras que los políticos asumían el control bajo su vigilancia.

La muerte de Tancredo Neves no interrumpió la transición. José Sarney, su vicepresidente y sucesor, condujo el proceso con habilidad política, consiguiendo inclusive, por mecanismos poco defendibles, revertir la tendencia hacia el régimen parlamentarista, al cual se oponían los militares.

La Constitución del 5 de octubre de 1988 fue pródiga en beneficios y parca en obligaciones. Mantenía una estructura parlamentaria, aunque adoptase, no obstante, el modelo presidencialista. A la Unión se le atribuyeron múltiples tareas, pero sin los recursos correspondientes. Los estados, y también el gobierno federal, continuaron gastando por cuenta de la emisión de moneda, obligando a los sucesivos “choques económicos”, posteriores todos, prácticamente, a los adoptados en Argentina.

Sarney, que inició su gobierno con el apoyo de casi todos los partidos, con la excepción del PT, concluyó su mandato aislado de la sociedad y sin apoyo político, con su imagen desgastada por la inercia administrativa.

La oposición en dicho periodo correspondió a los partidos del antiguo régimen —el PDS y sus aliados— mientras que la defensa del gobierno estaba a cargo del PMDB y el PFL.

Con el retorno de los políticos tradicionales de todos los matices a la vida pública, de la que los había expulsado el régimen instaurado en 1964, y con los mismos vicios del fisiologismo político, la situación eco-

nómico-financiera se agravó, deteriorando aún más la calidad de vida de los brasileños y la situación social.

Incapaz de revertir este cuadro, el presidente Sarney se excluyó del proceso sucesorio. Después de casi 30 años vino la primera elección directa para presidente de la República, Los partidos, desgastados ante la opinión pública, fuera por haber participado en el régimen militar (PDS) o porque sustentaran el periodo que se llamó de la Nueva República (1985-1990), como el PFL o el PMDB, no tuvieron éxito electoral.

La escena política estaba dominada: *a)* por un político populista tradicional, exgobernador de Rio Grande do Sul y de Rio de Janeiro, Leonel Brizola, un getulista histórico, cuyo signo de mayor coherencia es el proyecto de ser presidente de la República; *b)* por el más importante evento político después de 1964, el Partido de los Trabajadores, que vino a ocupar los espacios antes pertenecientes al Partido Laborista Brasileño y al Partido Comunista Brasileño, y cuyo candidato era un joven obrero metalúrgico de la región del ABC Paulista; y *c)* por el exgobernador del pequeño estado de Alagoas, Fernando Collor, fenómeno de *marketing* político, pero con un proyecto político improvisado, sin apoyo de los partidos, sustentado por una sigla recién lanzada, el PRN (Partido de Renovación Nacional).

La elección, realizada a dos vueltas, hizo que el electorado optase mayoritariamente por las propuestas de salvación nacional del candidato Collor de Mello.

En segundo lugar, y por una pequeña diferencia, el líder metalúrgico superó a Brizola, quien lo apoyó en la segunda vuelta. La mayoría de los electores depositó en las urnas un 50% de votos nulos o sin candidato, una manifestación inequívoca contra las prácticas políticas.

Collor de Mello asumió el poder sin una base política partidista, fundado en el salvacionismo voluntarista, apoyado por la gran masa de los desheredados que él llamó "descamisados", pero con el apoyo económico-financiero del gran capital.

Propuso una reforma del Estado y una reforma económica tan luego asumió el poder, habiendo obtenido poderes excepcionales del congreso. Estas propuestas, sin embargo, eran contrarias al interés de la gran burguesía nacional, completamente desfasada de la realidad del mundo moderno. Eran contrarias también al corporativismo sindicalista existente en el sector público y garantizado por la nueva Constitución. Tampoco fueron del agrado de los militares, ya que el control de la inflación provocó grandes reducciones en los gastos militares, como consecuencia del periodo de recesión que se enfrentaba, para no hablar de sus pérdidas salariales.

Sin apoyo político del Congreso para lograr una reforma constitucional, sin apoyo en la clase media y desacreditado entre los "descamisados", el presidente enfrenta reacciones de la sociedad civil organizada a través de manifestaciones en el campo y las ciudades, oposición en los cuarteles y falta de apoyo de los políticos tradicionales.

V. CONCLUSIONES

La historia política de la oposición en el Brasil está íntimamente ligada a los diversos momentos de relación entre los diferentes grupos sociales. Así es como las oligarquías rurales, desde el Imperio y hasta la llegada de lo que se denominó Revolución de Marzo, tuvieron un papel destacado en la definición de qué era el gobierno y qué la oposición. También los militares, a partir de la Guerra del Paraguay y hasta la última transición política, que fue el advenimiento de la Constitución de 1988, fueron actores permanentes en todas las definiciones políticas. Esto ocurrió tanto en la caída del Imperio y de la República Vieja, como en el ascenso y fin del Estado Nuevo, en la implantación del régimen de excepción en 1964 y en la restauración de la plenitud democrática. A partir de 1930, los militares fueron, por regla general, la expresión de la clase media, con la que se identificaban, y la cual no contaba con ningún partido que representara permanentemente sus intereses y voluntad. Segmentos importantes de la sociedad civil, como la Iglesia y la Orden de los Abogados del Brasil tuvieron un papel destacado en la defensa de los derechos humanos y en el retorno a la democracia. Sin embargo, nunca desempeñaron un papel decisivo, sino que actuaron como agentes canalizadores de las transformaciones políticas.

El retorno de Brasil al orden constitucional a partir de 1988 no trajo consigo la deseada estabilidad política, económica y social. La Constitución, nítidamente parlamentarista, redujo los poderes presidenciales, sin fortalecer a los partidos políticos, impidiendo la elección de una vía para superar la crisis económica y social. El país asiste sobresaltado a la sucesión de choques económicos, a la creciente recesión y a la inflación galopante, a la crisis social caracterizada por el desempleo, por la atención precaria a la salud, a la educación y la vivienda de la población marginada.

El gobierno, sin mayoría parlamentaria y sin una propuesta económica convincente, está incapacitado para sensibilizar al congreso nacional sobre las medidas necesarias para la restauración de su credibilidad ante la opinión pública. Sin embargo, no se puede acusar al Congreso de intransigencia o de oposición radical, pues aprobó prontamente todas las

medidas legislativas de apoyo al plan económico y la reforma administrativa federal. Muchas de las medidas, inclusive, eran de dudosa constitucionalidad, por lo que están siendo revisadas por los tribunales.

En estos momentos, el gobierno se empeña en la reforma constitucional, buscando ampliar la recaudación fiscal, desestatizar el sector de las telecomunicaciones y los minerales y reducir algunos de los derechos de los servidores públicos.

La reforma constitucional viene envuelta en una propuesta de entendimiento nacional, buscando la reconquista de la credibilidad del gobierno, profundamente desgastado por el fracaso de los planes económicos y las acusaciones crecientes de incompetencia administrativa y política.

El desgaste gubernamental deriva más de su propia incapacidad para superar la crisis que de la oposición partidaria. El gobierno cuenta directamente apenas con el 8.9% de los parlamentarios, pero los partidos alineados con las fuerzas políticas que lo eligieron alcanzan prácticamente la mayoría. Los partidos de oposición como el PMDB y el PDSB, incluido el PDT (Partido Democrático Laborista) de Leonel Brizola, han mantenido el diálogo con el gobierno. El único partido que ha realizado una oposición sistemática es el Partido de los Trabajadores. Por tanto, la crisis de gobernabilidad se debe más al fracaso del gobierno que a la acción de la oposición.

La gravísima crisis económica y social ha generado una insatisfacción popular capaz de provocar focos de rebelión espontánea, insuflada por el hambre y el desempleo. El movimiento de los sin-tierra, la favelización urbana, la divulgación de noticias de corrupción, la inseguridad pública y la falta de esperanza, son el caldo de cultivo propicio para la victoria de la oposición, tan pronto ésta consiga presentar una salida a la crisis.

Mientras tanto, las próximas elecciones presidenciales, aún distantes, y el agravamiento de la crisis, podrían adelantar el plebiscito que busca la implantación del régimen parlamentario. No hay, sin embargo, conciencia clara en el país de que esa sea la medida más adecuada. Tal vez venga a ser adoptada como paliativo para la crisis, como ocurrió en 1961.

No cabe duda de que el modelo institucional adoptado por la Constitución del 5 de octubre de 1988 no está logrando sacar adelante al país. La transición democrática se ha visto perjudicada por la incapacidad de los partidos políticos para presentar propuestas consistentes de superación de la crisis.

El pacto político pasa necesariamente por la redistribución de la renta, de los más ricos a los más pobres, como forma de reducir las desigualdades sociales, sin lo cual no hay modo de imaginar que sea imposible

una nueva ruptura del orden político y mucho menos aún integrar a Brasil en el primer mundo.

BIBLIOGRAFÍA *

CARDOSO, Fernando Henrique, *O Modelo Político Brasileiro*, Rio de Janeiro, Difel, 1979.

MOTTA, Paulo Roberto, *Movimentos Partidários no Brasil*, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1971.

PEIXOTO, João Paulo Machado (org.), *Partidos Políticos no Brasil*, Brasília, Instituto Tancredo Neves, 1987.

SKIDMORE, Thomas, *Brasil: de Getúlio à Castelo*, Paz e Terra, 1982.

SOUZA, Maria do Carmo C. Campello, *Estado e Partidos Políticos no Brasil (1930 à 1964)*, São Paulo, Editora Alfa-mega, Ltda., 1976.

* Los textos indicados en la bibliografía consultada, citados expresamente, resultan de completa coincidencia con las ideas defendidas por el autor.